

Señores:

JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO: 76001-33-33-013-2019-00055-00
DEMANDANTE: BLANCA EVERLY FRANCO LERMA Y OTROS
DEMANDADO: AEROCALI S.A. Y OTROS
LLAMADO EN GARANTÍA: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Y OTROS

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, conforme se acredita con el poder y certificado de existencia y representación legal adjunto, encontrándome dentro del término legal comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** propuesta por la señora Blanca Everly Franco Lerma y otros, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la Nación – Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, el Municipio de Palmira y Aerocali S.A., y en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por este último a mi prohijada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta las precisiones que se hace a continuación, anticipando que me opongo a las pretensiones sometidas a consideración de su despacho tanto en la demanda como en el llamamiento en garantía.

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD

Teniendo en consideración que el Auto interlocutorio No. 360, mediante el cual el despacho admitió el llamamiento en garantía formulado a mi representada, se notificó personalmente el día 9 de mayo de 2025, los términos para contestar la demanda y el llamamiento en garantía corrieron los días 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo, 3 y 4 de junio de 2025. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 225 del CPACA establece que la llamada en garantía cuenta con quince (15) días para contestar el llamamiento en garantía, término que se comienzan a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes a la remisión del correo electrónico. De esta forma, se concluye que este escrito es presentado dentro del término legal previsto para tal efecto.

CAPITULO II. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA POR ENCONTRARSE CONFIGURADA LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL CONTRATO DE SEGURO

De conformidad con las disposiciones de orden público contenidas en el artículo 182A del C.P.C.A., y en consideración a los principios de economía procesal y legalidad comedidamente se solicita al despacho proferir sentencia anticipada como quiera que se encuentra acreditada con suficiencia la prescripción extintiva del contrato de seguro, contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio. La norma aludida del C.P.A.C.A., fija para el juzgador el deber de proferir sentencia anticipada, cuando se encuentre probada, entre otras excepciones, la de caducidad y prescripción en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

- a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
- b) Cuando no haya que practicar pruebas;
- c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
- d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito. No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción, de conformidad con el artículo 176 de este código.”
(Negrilla y subrayado propio).

Dicha regla, guarda una consonancia intrínseca con el artículo 42 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A., la cual indica dentro de su literalidad:

“**ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ.** Son deberes del juez:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal.

(...)

8. Dictar las providencias dentro de los términos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas.

(...)

15. Los demás que se consagren en la ley.”

Ahora bien, el artículo 1081 del Código de Comercio, establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. La mencionada disposición específicamente señala:

“Art. 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que hace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En el primero de los casos, como se observa, la prescripción opera para el asegurado; mientras que en el segundo para cualquier clase de persona (tercero afectado). Del texto normativo, destaca el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la

prescripción ordinaria de la extraordinaria, pues en tanto la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no se efectúa esa distinción. Sobre este particular y en especial para establecer la diferencia entre los dos tipos de prescripciones derivadas del contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil ha manifestado lo siguiente:

(...) En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971, siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada –en general-, prohijó para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria (...)

Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que **la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, (...))**, al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que, expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento. ¹(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

El artículo 1131 del Código de Comercio, indica la forma en la que se determina el momento a partir del cual corren los términos de prescripción: *“(...) Artículo 1131: OCURRENCIA DEL SINIESTRO: En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. **Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial** (...)”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Para el caso que nos ocupa, se advierte que se encuentra acreditada la configuración del término prescriptivo de la acción con respecto a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Entidades Estatales No. 1501312000727 frente a mi representada, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. En tanto, el hecho objeto del litigio ocurrió el 12 de diciembre de 2016, con el presunto accidente sufrido por la señora Blanca Everly Franco Lerma, mientras que la radicación de solicitud de conciliación extrajudicial por parte de los ahora demandantes se realizó el 12 de diciembre de 2018, fecha que constituyó el inicio del término de prescripción para el asegurado. Es decir, desde el 13 de diciembre de 2018 hasta el 13 de marzo de 2020. No obstante, solo hasta el 29 de mayo de 2024 fue requerida Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. mediante llamamiento en garantía formulado por Aerocali S.A. Tal y como consta en el expediente digital.

En tal virtud, no existe duda que Aerocali S.A. al dejar pasar el término bienal después de conocer los

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 2002. MP: Dr. Nicolás Bechara Simancas

hechos que daban lugar ejercitar su derecho que hoy reclama en curso de este proceso, permitió que se extinguieran las acciones derivadas del contrato de seguro como consecuencia de la prescripción de que trata el artículo 1081 del C.Co. Lo anterior, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos esgrimidos en esta excepción.

Por lo anterior, se solicita al Honorable Despacho declarar fundada y próspera la presente excepción y se proceda a dictar sentencia anticipada en ese sentido.

CAPÍTULO III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I. FRENTE AL ACÁPITE “HECHOS” DE LA DEMANDA

Frente al hecho denominado “1.”: A mi representada no le consta, ni de manera directa ni indirecta, que el 12 de diciembre de 2016 la señora Blanca Everly Franco Lerma se dispusiera a viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por la aerolínea American Airlines. Así como tampoco que dicha ciudad fuera su lugar de residencia ni el de sus padres, los señores María Doelina Lerma y Carlos Tulio de Franco. Corresponderá a la parte actora cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del art. 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en ese sentido acreditar lo afirmado a través de la prueba que resulte conducente, pertinente y útil.

Frente al hecho denominado “2.”: A mi representada no le consta de manera directa o indirecta lo relacionado en este hecho. Hasta el momento, no obra en el expediente prueba alguna que permita demostrar, en primer lugar, que el día 12 de diciembre de 2016 se estuvieran realizando obras de construcción en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Tampoco se encuentran acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente habría ocurrido la caída de la señora Blanca Everly Franco, supuestamente ocasionada por residuos de cemento blanco presentes en dichas instalaciones. En todo caso, corresponde a la parte actora cumplir con la carga probatoria que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en ese sentido, demostrar lo afirmado mediante prueba que sea conducente, pertinente y útil.

Frente al hecho denominado “3.”: A mi representada no le consta directa o indirectamente lo mencionado en este hecho. No obstante, de las pruebas documentales que obran en el expediente se desprende que no es cierto que la señora Blanca Everly Franco Lerma no pudiera abordar el vuelo con destino a la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2016. En efecto, la aerolínea American Airlines, en respuesta a su solicitud, informó que la señora Franco Lerma fue ubicada en el vuelo 1152 con

destino a la ciudad de Miami en la misma fecha originalmente programada. Adicionalmente, tampoco es cierto que la señora Blanca Everly Franco Lerma hubiera sido asistida con una silla de ruedas proporcionada por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ya que dicho servicio fue suministrado exclusivamente por la aerolínea hasta el momento en que abordó el vuelo hacia Miami.

Frente al hecho denominado “4.”: A mi representada no le consta de manera directa o indirecta lo relacionado en el hecho. No obstante, al revisar las pruebas documentales que obran en el expediente, se observa que la historia clínica suscrita por el médico Mauricio Ángel Bejarano tiene fecha del 16 de noviembre de 2017, es decir, once meses después de la supuesta ocurrencia de los hechos narrados por la parte demandante. En dicha atención médica, la señora Blanca Everly Franco Lerma fue valorada a través de la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva.

En la mencionada historia clínica se consignan como diagnósticos la artrosis de rodilla y el sobrepeso, y como antecedentes médicos relevantes, hipertensión arterial (HTA) y dislipidemia. Dichos hallazgos permiten concluir, en primer lugar, que la demandante no buscó atención médica de manera inmediata tras el presunto incidente, lo cual genera dudas razonables sobre la existencia y la gravedad del supuesto evento. En segundo lugar, que la atención brindada fue gestionada por la ARL, lo que indicaría que el motivo de consulta habría estado relacionado con una eventual contingencia laboral, y no con los hechos que ahora pretende atribuir a las demandadas. Adicionalmente, es importante resaltar que el diagnóstico de artrosis corresponde a una patología de origen degenerativo, caracterizada por el desgaste progresivo del cartílago articular, comúnmente asociada a factores como la edad, el sobrepeso y enfermedades crónicas como las consignadas en sus antecedentes médicos. En este contexto, resulta más probable que los hallazgos clínicos señalados en la rodilla de la señora Franco Lerma obedezcan a una causa de tipo degenerativo o mecánica crónica, y no a un hecho súbito, accidental y atribuible al presunto incidente ocurrido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Frente al hecho denominado “5.”: A mi representada no le consta de manera directa o indirecta lo mencionado en este hecho. Sin embargo, del escrito de contestación de demanda presentado por la sociedad Aerocali S.A., se desprende que el personal a su cargo no intervino en ningún momento en la atención de la señora Blanca Everly Franco Lerma, ni recibió reporte alguno sobre la supuesta ocurrencia del incidente al que hace referencia la parte actora. Aerocali S.A., en su calidad de operador del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, manifestó expresamente que no tiene registro de que el día de los presuntos hechos se hubiera presentado algún evento que involucrara a la señora Franco Lerma, ni que hubiera sido requerido su personal para brindar asistencia o soporte en relación con una eventual caída dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Frente al hecho denominado “6”: A mi representada no le consta lo referido en el presente hecho. Es necesario que el despacho tenga en cuenta que lo mencionado carece de respaldo probatorio que pueda ser objeto de valoración y que acredite su veracidad, pues no hay pruebas de la supuesta existencia de materiales de construcción, específicamente cemento, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón para el día 12 de diciembre de 2016. Así las cosas, no hay evidencia dentro del proceso de una falla administrativa de la sociedad Aerocali S.A., y mucho menos que esta hubiera sido la causante del accidente alegado por los demandantes.

Frente al hecho denominado “7.”: A mi representada no le consta, ni de manera directa ni indirecta, lo afirmado en este hecho. Corresponderá a la parte actora cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del art. 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en ese sentido acreditar lo afirmado a través de la prueba que resulte conducente, pertinente y útil.

Frente al hecho denominado “8.”: A mi representada no le consta directamente lo referido en este hecho. La conformación del núcleo familiar de la señora Blanca Everly Franco Lerma y las relaciones entre sus miembros son circunstancias personales completamente extrañas para la compañía que represento. De tal forma, es su deber acreditarlo con medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles.

Frente al hecho denominado “9.”: A mi representada no le consta de manera directa lo relacionado en este punto, que más que un hecho, resulta ser una apreciación subjetiva de la parte demandante, sobre la afectación psicológica y emocional que causo la lesión sufrida por la señora Blanca Everly Franco Lerma. Corresponderá a la parte actora cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del art. 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en ese sentido acreditar lo afirmado a través de la prueba que resulte conducente, pertinente y útil.

II. FRENTE AL ACÁPITE “DECLARACIONES Y CONDENAS” DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad. Lo anterior, comoquiera que la responsabilidad administrativa de la Concesionaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A. no se estructuró, toda vez que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta falla en el servicio como del daño y el nexo de causalidad entre ambos. En el sub lite, la parte demandante no ha cumplido con ello, lo que inviabiliza la declaratoria de responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, me referiré a cada una de las pretensiones expuestas en el escrito de la demanda, de la siguiente manera:

Frente a la pretensión denominada “1”: Respetuosamente solicito al Despacho no declarar administrativa ni patrimonialmente responsable a la Concesionaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A., como quiera que la responsabilidad presuntamente atribuida es inexistente. No hay ningún tipo de evidencia en el plenario que establezca que por parte de la entidad se desarrolló alguna conducta negligente u omisiva que hubiese sido la desencadenante de los hechos y perjuicios reprochados.

En ese sentido, la ausencia de responsabilidad atribuible a la Concesionaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A no puede derivar en indemnización por ningún concepto en favor de la parte demandante, así:

a. Perjuicio moral:

Me opongo a la prosperidad de dicha pretensión, en vista que no puede reconocerse el daño reclamado, pues no ha sido demostrado por quien lo pretende. A su vez resulta importante anotar que la cuantificación del perjuicio aludido además de injustificada, no se ajusta a los parámetros establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la Sentencia del 28 de agosto de 2014.

La reparación del daño moral en caso de lesiones personales atiende a la gravedad de la lesión, es decir se parametrizaron distintos grados de calificación de la gravedad de la lesión, frente a los cuales se crearon niveles correspondientes al grado de cercanía con la víctima, y sobre esos indicadores se establecieron topes indemnizatorios en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Con esta apreciación jurisprudencial se puede concluir que todas las tasaciones realizadas por la parte demandante frente al daño moral son excesivas, pues se debe tener en cuenta que para efectos de este tipo de liquidación se toma en cuenta la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la tasación de perjuicios conforme a derecho se hace sujetándose al resultado de esta prueba y confrontándola con la limitación jurisprudencial establecida, la cual es inexistente dentro del proceso.

En consecuencia, y en consonancia con lo anteriormente expuesto, en primer lugar, no obra en el expediente medio de convicción alguno que permita inferir, siquiera de manera indiciaria, que las presuntas lesiones sufridas por la señora Blanca Everly Franco Lerma sean atribuibles a la conducta de las entidades demandadas. La ausencia de prueba directa, pertinente y conducente impide

establecer un nexo causal entre el supuesto hecho y el daño alegado, lo cual imposibilita atribuir responsabilidad en los términos exigidos por la jurisprudencia contenciosa administrativa.

En segundo lugar, las pretensiones indemnizatorias formuladas por concepto de perjuicios morales a favor de la señora Franco Lerma y de sus padres, por la suma de 100 SMLMV para cada uno, exceden ostensiblemente los parámetros jurisprudenciales fijados por el Honorable Consejo de Estado. Ello es así, máxime cuando no se allega dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral u otro medio técnico que permita establecer la gravedad real y objetiva de las lesiones que se alegan como sustento del daño moral, lo que impide realizar una valoración razonable del perjuicio en términos de intensidad, duración y afectación psíquica o emocional.

Adicionalmente, las sumas solicitadas por perjuicios morales a favor de la señora Martha García de Franco y del señor Milton Duberly Palacios, en calidad de tíos de la presunta víctima directa, por un monto individual de 50 SMLMV, resultan igualmente desproporcionadas y contrarias a los lineamientos jurisprudenciales. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que la reparación por daño moral solo procede a favor de familiares que acrediten un vínculo afectivo estrecho y permanente con la víctima directa, lo cual no puede presumirse en el caso de parientes en tercer grado como los tíos. En este sentido, no obra en el expediente prueba alguna que acredite la existencia de un lazo afectivo relevante entre los mencionados terceros y la señora Franco Lerma, por lo que dicha pretensión carece de fundamento fáctico y jurídico.

b. Perjuicios a la vida de relación:

Me opongo a la prosperidad del perjuicio reclamado por los demandantes por concepto de daño a la vida en relación, pues al ser notoria la ausencia de pruebas sobre la responsabilidad de la demandada, no habría lugar a que la parte pasiva se viera obligada a proceder con el pago de cualquier indemnización perseguida. Además, no es suficiente alegar un daño, se debe llevar al Juzgador al convencimiento de que el mismo existe, debiendo adicionalmente acreditarse su gravedad y como se dijo, probarse la responsabilidad de la entidad demandada, lo que en el presente caso no ocurre.

En complemento, se tiene que el perjuicio denominado “daño a la vida en relación” pretendido por la parte actora fue abolido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ahora bien, en el remoto evento que el Juzgador conceda la pretensión, adecuándola al daño inmaterial de “daño a la salud”, tampoco resultaría procedente, debido a que no se ha demostrado el nexo causal entre el presunto daño y el actuar de las demandadas, así como tampoco la gravedad o magnitud de la lesión.

c. Daño a la salud:

Me opongo a la prosperidad de reconocer la suma de 100 SMLMV en favor de la señora Blanca Everly Franco Lerma por concepto de daño a la salud, pues al ser notoria la ausencia de pruebas sobre la responsabilidad de la demandada, no habría lugar a que la parte pasiva se viera obligada a proceder con el pago de la indemnización perseguida. Además, no es suficiente alegar un daño, se debe llevar al Juzgador al convencimiento de que el mismo existe, debiendo adicionalmente acreditarse su gravedad y como se dijo, probarse la responsabilidad de la entidad demandada, lo que en el presente caso no ocurre.

En complemento, se tiene que la cuantificación de este perjuicio se caracteriza por ser desmedido, en tanto que no existe medio probatorio suficientemente válido que permita tasar el perjuicio en los baremos establecidos por el Consejo de Estado. Al respecto, no se aporta dictamen de pérdida de capacidad laboral, que permita sustentar que las lesiones de la demandante alcancen el grado y porcentaje aducido en el líbello introductorio.

d. Perjuicios materiales:

La pretensión por concepto de lucro cesante consolidado y futuro reclamada por la parte actora resulta injustificada. En primer lugar, porque la Concesionaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A. no es responsable de las lesiones de la señora Blanca Everly Franco Lerma. En segundo lugar, la cuantía alegada no fue probada, dado que no existe dentro del plenario una prueba tan siquiera sumaria que evidencie la realización de la actividad económica por parte de la señora Franco en la fecha de ocurrencia de los hechos. En el supuesto que sea comprobable, no hay prueba de la frecuencia en la cual la desarrollaba y por ende de los ingresos percibidos.

En ese sentido, se concluye que el monto pretendido es logrado al arbitrio de la parte demandante, y como lo ha sostenido la jurisprudencia, al tratarse de un perjuicio de carácter objetivo, la prueba material es el único elemento procedente para su reconocimiento. Por lo tanto, a falta de este requisito indispensable, resulta claro que el despacho debe negar la pretensión solicitada.

Cabe aclarar que la desestimación de la cuantía que se realiza frente a cada una de las liquidaciones de perjuicios de la demanda, bajo ningún motivo, constituye aceptación de responsabilidad.

III. EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA

En el presente acápite se presentarán los fundamentos de hecho y de derecho que en general, sustentan la oposición a las pretensiones de la demanda y que en particular dan cuenta de que la

demandante no ha probado, como es su deber, la existencia de todos los supuestos normativos de la presunta existencia de responsabilidad del Estado que pretende endilgarse a la parte demandada en este litigio.

Sustento la oposición a las pretensiones invocadas por el extremo activo de este litigio, de conformidad con las siguientes excepciones:

A. LA PARTE ACTORA NO ACREDITA LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DEL SUPUESTO HECHO GENERADOR DEL DAÑO

Según los hechos expuestos en el escrito de demanda, las presuntas lesiones sufridas por la señora Blanca Everly Franco Lerma habrían ocurrido el día 12 de diciembre de 2016, como consecuencia de una caída desde su propia altura dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. La parte actora sostiene que dicha caída se produjo por la presencia de un supuesto material de obra, específicamente, cemento blanco, el cual se habría encontrado esparcido en el área de circulación sin señalización alguna ni medidas preventivas de seguridad, configurando, según afirma, una omisión en el deber de cuidado por parte de la Concesionaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A. No obstante, al analizar el acervo probatorio obrante en el expediente, no se encuentra acreditada la existencia de una obra en curso para la fecha mencionada ni la presencia de materiales de construcción ubicados en zonas de tránsito sin señalización o advertencia, y mucho menos la ocurrencia de los supuestos de hecho alegados, pues no existe informe o reporte del incidente por parte del personal vinculado a Aerocali S.A. u otra prueba que sustente lo dicho por la parte actora.

Es ese sentido, es importante recordar que según lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, que la demandante es quien debe evidenciar de manera inequívoca y sin lugar a dudas que se configuraron los elementos que estructuran la responsabilidad y en este caso no lo hace. Como se ha dicho, no hay elementos probatorios que siquiera permitan inferir las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se presentó el supuesto accidente y por ende cuál fue la causa real y eficiente de las lesiones sufridas por la señora Blanca Everly Franco Lerma.

Frente a la carga de la prueba de la parte accionante, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

“La parte demandante debe probar la falla del servicio, consistente en la omisión en la señalización y mantenimiento de la vía, y el nexo de causalidad entre esta y el daño, en los términos del artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 CCA. (...) El juicio de responsabilidad

supone el estudio del nexo causal entre la conducta del demandado y el efecto adverso que de ella se deriva para el demandante, de ahí que la acción o la omisión de las autoridades debe ser la causa del daño que se reclama en la demanda para imputar responsabilidad al Estado. Este presupuesto de la responsabilidad debe estar debidamente acreditado en el proceso, porque la ley no ha establecido presunciones legales frente al nexo de causalidad, de modo que si no se prueba la verdadera causa que desencadenó el hecho dañoso, no es posible atribuir responsabilidad al demandado. Por ello, para que la pretensión de responsabilidad prospere es necesario que el demandante acredite el daño y que ese resultado tuvo por causa directa y adecuada la conducta que se le imputa al demandado. (...) Como no obra prueba que acredite que un obstáculo en la vía ocasionó el accidente de tránsito en el que resultó herido (...) ni el mal estado de la vía, no se probó el nexo de causalidad entre el daño y la omisión endilgada a la demandada. Por ello, la Sala confirmará la sentencia apelada.”²

La parte demandante afirma que, para la fecha de los hechos, existían materiales de construcción esparcidos en el piso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, lo que habría ocasionado su caída. Sin embargo, dicha afirmación carece por completo de respaldo probatorio dentro del expediente. En efecto, no obra prueba alguna que acredite la existencia de obras de construcción en curso el día 12 de diciembre de 2016 dentro del aeropuerto, ni la presencia de materiales de obra sin la debida señalización. La inexistencia de elementos como informes de novedad, reportes de incidentes, registros de atención por parte del personal de seguridad o primeros auxilios de Aerocali S.A., refuerza la conclusión de que no se produjo el hecho en los términos en que ha sido descrito por la demandante.

En lo que respecta a la historia clínica allegada al proceso, es preciso señalar que dicho documento no constituye prueba idónea para establecer cómo ocurrió el supuesto hecho, ni permite identificar su causa eficiente. En efecto, el motivo de consulta apenas hace una alusión genérica a una caída en el aeropuerto, sin brindar detalles específicos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría producido el incidente. Esta falta de precisión impide establecer con claridad el contexto en el que presuntamente ocurrieron las lesiones y, por tanto, desvirtúa cualquier pretensión de acreditar el nexo causal entre el hecho alegado y los daños que se afirman. Además, debe resaltarse que la historia clínica fue expedida el 16 de noviembre de 2017, es decir, casi un año después de la supuesta caída ocurrida el 12 de diciembre de 2016. Esta circunstancia temporal debilita considerablemente su valor probatorio respecto de un hecho que, por su naturaleza, exigiría atención médica inmediata y el registro oportuno del evento. Más aún, los diagnósticos consignados en el documento: artrosis de rodilla, sobrepeso, hipertensión arterial (HTA) y dislipidemia, corresponden a patologías de tipo degenerativo y crónico, lo que permite inferir que las dolencias de la paciente no se relacionan necesariamente con

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de octubre de 2020, M.P. German Arturo Arango Restrepo, Exp. (37981)

un evento accidental, sino con condiciones médicas preexistentes.

Por otra parte, la respuesta dada por la aerolínea American Airlines, así como los pases de abordar allegados al proceso, tampoco permiten acreditar la ocurrencia del hecho que se invoca como fundamento de la demanda. Ninguno de estos documentos hace referencia a las causas del accidente. Por el contrario, la aerolínea informó que la señora Blanca Everly Franco Lerma fue reubicada el mismo día en un vuelo con destino a Miami, circunstancia que pone en duda la supuesta gravedad del hecho alegado y su efecto incapacitante.

Por otra parte, para demostrar algunos de los presuntos hechos el extremo actor aporta una serie de fotografías, sin embargo, dichas pruebas documentales tampoco le permiten al operador jurídico dar por probados los hechos en tanto no es posible acreditar su origen, autoría y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron tomadas. Para dar sustento a este argumento, en cuanto a los videos la ¹Sección Tercera, Sub-sección C, del Consejo de Estado, en la sentencia de 12 de agosto de 2013, expediente 27063, consideró que puede no valorarse un video y carece de valor probatorio cuando no existe certeza de su autenticidad e integridad³ que permitan valorarlo contrastadamente con otras pruebas, aplicando la delimitación de su valoración la jurisprudencia que operaba para la época en materia de fotografías⁴, y considerando que en caso de integrarse para valorarse en conjunto con otros medios probatorios es necesario que estos últimos permitan demostrar tanto la producción del video, como los hechos contenidos en él. Por lo tanto, para el Juzgador, es necesario que los videos y fotografías que aporte el extremo actor puedan brindar certeza de la persona quien las tomó, del sitio donde fueron tomados y de las condiciones en que estas fueron obtenidas; así como tampoco permiten dar cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que estas fueron tomadas, incumpliendo así los parámetros o directrices esbozadas por la jurisprudencia. Lo expuesto, deviene en que carecen de valor probatorio.

En este sentido, resulta fundamental advertir que la falta de pruebas que describan con claridad y especificidad las condiciones en las que supuestamente ocurrió el accidente, impide al Despacho tener un conocimiento certero de los hechos. No se ha demostrado de forma fehaciente la existencia de una situación de riesgo anormal dentro de las instalaciones aeroportuarias, ni tampoco la presencia de

³ En similar sentido: Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 13 de mayo de 2014. “[...] La parte actora, con el fin de acreditar varios de los hechos, aportó al proceso unas fotografías y un videocasete –reposan en sobre separado-, que no serán valorados en esta instancia, comoquiera que carecen de mérito probatorio, pues solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar ni la época en que fueron tomadas o documentadas, y menos se tiene certeza sobre el sitio en el que en ellas aparece, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación, no puede cotejarse con otros medios probatorios de prueba allegados al proceso”.

⁴ Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de abril de 2012, expediente 22377. “Con la intención de definir el valor probatorio de las fotografías (...) la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil los documentos que han de apreciarse como pruebas deben ser auténticos, “es decir debe haber certeza respecto de la persona que lo ha elaborado y de que el hecho plasmado en el documento, en este caso en las fotografías, corresponda a la realidad, puesto que, al igual que en cualquier otro documento, hay riesgo de alteración” (...) En relación con las fotografías, además de que resulta imposible establecer su autenticidad, lo cierto es que bajo ningún supuesto pueden ser valoradas dado que solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas”.

materiales de obra sin señalización, ni mucho menos la ocurrencia del accidente mismo. Esta ambigüedad e insuficiencia probatoria afectan la credibilidad de la versión de los hechos presentada por la parte actora.

Por todo lo anterior, se puede concluir que la parte demandante no logró acreditar dentro del proceso la ocurrencia de los supuestos de hecho, así como tampoco, que el material de construcción en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en caso de existir, hubiera sido la causa adecuada y única de las lesiones sufridas por la señora Blanca Everly Franco. En consecuencia, no es posible atribuirle fácticamente la responsabilidad a Aerocali S.A.

B. INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO ATRIBUIBLE A LA CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN – AEROCALI S.A.

La parte actora sostiene que las lesiones presuntamente sufridas por la señora Blanca Everly Franco Lerma, como consecuencia de una caída desde su propia altura el día 12 de diciembre de 2016 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, son atribuibles a Aerocali S.A. Según afirma, la caída se habría producido por la presencia de cemento blanco en el piso, el cual no habría estado debidamente señalado, y por la supuesta inobservancia de los protocolos de atención médica o primeros auxilios por parte del personal de la Concesionaria. Sin embargo, no allegó con su demanda ningún medio de convicción que permita acreditar, siquiera indiciariamente, la existencia del material de construcción referido, su supuesta disposición en el área de tránsito de pasajeros ni, mucho menos, su relación causal con el presunto menoscabo en la salud de la señora Franco Lerma. Tampoco obra prueba que demuestre una omisión en la atención médica por parte de Aerocali S.A. o que establezca una actuación negligente del personal del aeropuerto.

Una de las implicaciones más importantes al determinar el régimen de responsabilidad es el comportamiento de las partes. El régimen subjetivo de responsabilidad, además de ser el postulado general, le impone a la parte demandante la carga probatoria, por tanto, es ella quien debe tener un comportamiento activo en la aportación del material que soporta los supuestos de hecho registrados en la demanda.

El Consejo de Estado se ha referido a la incumbencia de la parte activa en probar los hechos en los cuales fundamenta su pretensión, de la siguiente manera:

“(…) Ahora bien, como lo ha manifestado la jurisprudencia nacional en materia de la carga de la prueba, para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación; pues ninguna de las partes goza de un privilegio

especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la demandante, debe anotarse que quien presenta el libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos. Sobre la carga de la prueba esta Corporación explicó: “En procesos contenciosos o controversiales como el presente, el juez no puede adoptar decisiones que no estén fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulte afectado...”.⁵

En tratándose de la falla del servicio como título de imputación y la respectiva carga de la prueba a cargo del demandante, la máxima corporación de lo contencioso administrativo precisó:

“(…) La Sala, de tiempo atrás, ha dicho que la falla del servicio ha sido en el Derecho Colombiano y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la Falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual (…)

(…) Reiteradamente la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentran acreditados los siguientes elementos: i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; iii) un daño antijurídico, y iv) la relación causal entre la omisión y el daño (…)”⁶

En este contexto, resulta claro que la demandante no allegó con su escrito introductorio, ni solicitó la práctica de prueba idónea, conducente, pertinente o útil que permita acreditar los supuestos fácticos en los que sustenta su pretensión indemnizatoria. No existe en el expediente evidencia que confirme la presencia de material de construcción en el área en la que supuestamente ocurrieron los hechos. Tampoco se encuentra acreditada la ejecución de obras civiles o de mantenimiento dentro del aeropuerto en la fecha referida, ni la presencia de condiciones inseguras o irregulares que implicaran

⁵ Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia 18048, mayo 09 de 2011. MP Enrique Gil Botero

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera (2011). Sentencia 22.745, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 14 de septiembre

un riesgo para los usuarios.

Asimismo, resulta relevante destacar que no se allegó informe de novedad, reporte de incidente, constancia del personal de seguridad o de atención en primeros auxilios, ni registro alguno que documente la ocurrencia del accidente descrito. Este vacío probatorio es determinante, en tanto que, según las reglas del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en sede contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, corresponde a la parte actora demostrar los hechos constitutivos de su pretensión. No basta con la mera afirmación de un daño: se exige acreditar el hecho, su causa y el nexo de imputación con la entidad demandada.

Igualmente, la historia clínica allegada al proceso, expedida casi un año después del presunto accidente, no resulta suficiente ni adecuada para demostrar que las lesiones tienen origen en una caída ocurrida en el aeropuerto. Como se ha mencionado, el documento solo hace una referencia genérica a una caída, sin especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni describir con detalle el mecanismo del trauma. Más aún, el diagnóstico consignado corresponde a patologías de origen degenerativo (artrosis de rodilla y sobrepeso), lo cual sugiere que los síntomas presentados por la señora Franco Lerma podrían ser atribuibles a condiciones médicas preexistentes, y no a un evento accidental reciente.

Adicionalmente, la respuesta oficial emitida por la aerolínea American Airlines a petición de la actora y los pases de abordar, no corroboran en modo alguno la versión de los hechos presentada. La aerolínea indicó que la pasajera fue reubicada en otro vuelo con destino a Miami el mismo día, lo que contradice la tesis de que el incidente haya sido de tal gravedad que le impidiera viajar. Tampoco se reportó incidente alguno en el sistema de atención al pasajero ni se hizo mención a una atención médica urgente.

En este contexto, debe recordarse que la responsabilidad patrimonial del Estado, bajo el régimen de falla en el servicio o daño antijurídico por omisión, exige la acreditación de tres elementos fundamentales: (i) la existencia de un daño cierto, (ii) que dicho daño sea imputable a una conducta activa u omisiva de la administración o sus delegados, y (iii) que exista un nexo causal entre esa conducta y el perjuicio alegado. En el caso sub judice, no se ha demostrado ninguno de estos elementos con el estándar probatorio requerido.

En consecuencia, ante la falta absoluta de prueba que acredite la ocurrencia del accidente, las circunstancias que lo rodearon, y la existencia de una falla atribuible a Aerocali S.A., no es posible estructurar responsabilidad alguna.

Por todo lo anterior, se solicita respetuosamente declarar probada la presente excepción.

C. CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DE LA VICTIMA COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LAS DEMANDADAS

En el presente caso, la parte actora afirma, sin aportar prueba conducente, pertinente ni útil, que el día 12 de diciembre de 2016, la señora Blanca Everly Franco Lerma se desplazaba a pie por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, con el propósito de abordar un vuelo operado por la aerolínea American Airlines con destino a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Según su versión, en el trayecto habría encontrado una zona del aeropuerto donde presuntamente se adelantaban obras de construcción en el piso, sin la debida señalización, y al pisar residuos de cemento blanco cayó al suelo, lesionándose su rodilla derecha. Sin embargo, se omite que, de ser cierto, lo ocurrido a la señora Franco Lerma fue consecuencia de su propio actuar imprudente y negligente.

Para que exista responsabilidad, es necesario la ocurrencia de un daño y, por daño ha de entenderse la lesión efectiva y definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona; el daño deberá ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido»⁷

Así, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

“... tanto doctrinal como jurisprudencialmente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en

⁷ MAZEAUD. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p.510

suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia.”⁸

En ese sentido, para que una entidad sea exonerada de responsabilidad en el marco de un proceso de reparación directa, debe concurrir una **causa extraña** que rompa el nexo de causalidad entre la conducta atribuida y el daño alegado. Entre las causas extrañas reconocidas por la jurisprudencia se encuentran: la **fuerza mayor o caso fortuito**, el **hecho exclusivo de un tercero** y, especialmente, la **culpa exclusiva de la víctima**. Esta última se configura cuando el propio comportamiento del afectado resulta ser la causa directa y determinante del perjuicio, excluyendo cualquier participación activa o pasiva por parte de la administración o su contratista. Al respecto la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo ha manifestado que:

“(…) en materia Contencioso Administrativa, para la determinación de la responsabilidad de la parte demandada, reviste especial importancia el análisis de facto y jurídico del comportamiento de la víctima en la producción de los hechos, con miras a establecer -de conformidad con el grado, importancia, eficacia, previsibilidad, irresistibilidad, entre otros aspectos de esa conducta - si hay lugar a la exoneración del ente acusado –hecho exclusivo de la víctima - o a la disminución del quantum de la indemnización en el evento en que se presente la concurrencia de culpas. (...)”⁹

Por su parte, el H. Consejo de Estado ha señalado sobre el particular lo siguiente:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado: 24 Expediente: 38.252 Actores: “

(...) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los

⁸ Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021.

⁹ C. E. Sec. Tercera, Sent. Exp. 23.710, may. 14/2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)”¹⁰

Además, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, la culpa de la propia víctima refiere a lo siguiente:

“10.4.3.- La culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado, se ha entendido como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”. Dicha postura de la Sección Tercera llevó a concluir:

“[...] Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño.”¹¹

En ese sentido, se destaca que los hechos narrados por la parte demandante carecen de respaldo probatorio y presenta inconsistencias materiales que permiten inferir, en primer lugar, que lo ocurrido —de haber existido— fue producto del actuar imprudente y negligente de la misma demandante. En efecto, no existe en el expediente constancia alguna sobre la existencia de obras de construcción en las instalaciones del aeropuerto en la fecha mencionada, ni registro de materiales de construcción dispuestos en zonas de tránsito de pasajeros, y mucho menos evidencia que acredite la falta de señalización o advertencia sobre un supuesto riesgo.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la descripción de los hechos proporcionada por la actora, puede colegirse que la caída se habría producido como resultado de una falta de atención a su entorno por parte de la señora Franco Lerma, lo cual rompe cualquier vínculo de causalidad con una supuesta omisión atribuible a la concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de fecha 25 de julio de 2002, expediente 13.744.

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de fecha 1° de abril de 2016, radicado No. 05001-23-31-000-2010-00292-02(55079), C.P. Jaime Orlando Santofimio

Bonilla Aragón – Aerocali S.A. De haber existido una obra o intervención en el piso, esta habría sido visible y evidente, por lo que una persona que actúe con diligencia ordinaria, prestando atención a su desplazamiento, habría podido evitar el supuesto obstáculo.

De igual forma, resulta relevante observar que, tras el supuesto incidente, la señora Franco Lerma abordó un vuelo sin solicitar atención médica inmediata ni asistencia por parte del personal del aeropuerto. Esta circunstancia no solo resta credibilidad a la gravedad del hecho alegado, sino que, además, da cuenta de una conducta omisiva por parte de la propia demandante, que, de haber sufrido realmente una lesión incapacitante, habría debido acudir inmediatamente a los mecanismos de atención en salud disponibles en la terminal aérea. Su pasividad ante el hecho que dice haber sufrido, sugiere una falta de correspondencia entre el relato de los hechos y el comportamiento posterior.

Tampoco obra en el expediente reporte de novedad, informe de incidente, intervención de primeros auxilios o constancia alguna por parte del personal del aeropuerto, lo cual refuerza la conclusión de que, de haberse producido una caída, esta no fue de tal entidad como para activar los protocolos ordinarios de seguridad y atención al usuario.

En ese orden de ideas, no solo se evidencia una ausencia total de prueba sobre la existencia del hecho, su causa y la responsabilidad atribuida a la administración, sino que incluso, valorando hipotéticamente los supuestos presentados por la demandante, puede concluirse que la eventual caída fue producto exclusivo de su propia conducta imprudente, lo cual excluye cualquier tipo de imputación jurídica a Aerocali S.A., máxime cuando no se ha acreditado un hecho antijurídico ni un daño imputable al Estado.

Por lo tanto, solicito respetuosamente declarar probada la excepción.

D. REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

En consonancia con los argumentos previamente expuestos y de manera subsidiaria, se solicita respetuosamente al despacho que, en el evento de reconocer una o varias de las pretensiones esgrimidas por los demandantes, se aplique la correspondiente reducción de la indemnización. Esta reducción debe ser proporcional a la contribución que tuvieron los demandantes, en la materialización del presunto hecho dañoso.

Al respecto el Consejo de Estado ha mencionado que:

“De ahí que, la autoridad judicial demandada se encontraba habilitada para estudiar si se configuraba

alguno de los eximentes de responsabilidad, entre los que se encuentra, el hecho de la víctima, como efectivamente lo hizo. Por ello, al encontrar que la actuación de la víctima directa concurrió en la producción del daño, decidió reducir el valor de la indemnización. De modo que, contrario a lo alegado por el actor, el juez de segunda instancia no desbordó el marco de su competencia y tampoco incurrió en el defecto sustantivo alegado.”¹²

Esta jurisprudencia respalda la facultad y el deber del juez de considerar la concurrencia de causas en la producción del daño y ajustar consecuentemente la indemnización.

En el caso que nos ocupa, las pruebas que obran en el expediente acreditan que los demandantes tuvieron una incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del daño. Por lo tanto, se solicita que se declare que el porcentaje de la causación del daño atribuible a la parte actora, como mínimo, del 50%. Se insta al Despacho a realizar un análisis causal exhaustivo de las conductas implicadas en el evento dañoso, con el fin de determinar con precisión la incidencia de los demandantes en la ocurrencia del daño. Este análisis es fundamental para ajustar equitativamente la indemnización, si es que hubiere lugar a ella, en proporción directa a la contribución del tercero en el daño sufrido por la víctima.

Al respecto se señala que la reducción propuesta no busca minimizar los presuntos perjuicios de las víctimas, sino aplicar los principios de equidad y proporcionalidad en la determinación de la responsabilidad civil. La participación directa y dolosa en la comisión del daño debe necesariamente reflejarse en la cuantificación de la indemnización, si es que esta llegara a considerarse procedente.

Por las razones expuestas, se solicita respetuosamente al Despacho declarar probada esta excepción y, en consecuencia, aplicar la reducción propuesta de al menos un 50% en cualquier indemnización que pudiera llegar a decretarse.

E. CARENCIA DE PRUEBA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS

De acuerdo a lo probado en el plenario, se logró evidenciar que no existe responsabilidad frente a la Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A. sobre los hechos de la demanda, ni mucho menos en contra de mi prohijada, por cuanto no se integró por la parte actora los medios de pruebas fehacientes para demostrar la legitimidad, ni mucho menos la causación de los perjuicios alegados. Las pruebas recaudadas no otorgan una convicción real sobre la producción, naturaleza y cuantía del supuesto detrimento patrimonial irrogado, el cual, al no ser objeto de presunción, no puede ser reconocido sin mediar pruebas fehacientes sobre su causación.

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. C.P. Milton Chaves García. Radicación 2018- 03357

a. Daño moral

Frente al daño moral se afirma que la señora Blanca Everly Franco Lerma como víctima directa y su núcleo familiar lo han sufrido desde la ocurrencia del accidente, y por lo tanto solicitan la indemnización de este tipo de perjuicio en la suma de 100 SMLMV en favor de la lesionada, su madre y padre, y 50 SMLMV para su tía y tío. A pesar de ello, la parte actora no acredita las circunstancias fácticas de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló el presunto evento dañino, de allí que sin tener certeza de este hecho, no sea posible atribuir o endilgar una imputación fáctica o jurídica del mismo. De otro lado, descendiendo al presunto daño reclamado, no es posible establecer una relación de causalidad (causa adecuada) entre un evento y los supuestos perjuicios reclamados.

Aunado a ello, las solicitudes de daño moral se muestran desmedidas frente a los baremos establecidos para los asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado en el evento de lesiones, por ejemplo, los establecidos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Ello es así, máxime cuando no se allega dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral u otro medio técnico que permita establecer la gravedad real y objetiva de las lesiones que se alegan como sustento del daño moral, lo que impide realizar una valoración razonable del perjuicio en términos de intensidad, duración y afectación psíquica o emocional.

Adicionalmente, las sumas solicitadas por perjuicios morales a favor de la señora Martha García de Franco y del señor Milton Duberly Palacios, en calidad de tíos de la presunta víctima directa, por un monto individual de 50 SMLMV, resultan igualmente desproporcionadas y contrarias a los lineamientos jurisprudenciales. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que la reparación por daño moral solo procede a favor de familiares que acrediten un vínculo afectivo estrecho y permanente con la víctima directa, lo cual no puede presumirse en el caso de parientes en tercer grado como los tíos. En este sentido, no obra en el expediente prueba alguna que acredite la existencia de un lazo afectivo relevante entre los mencionados terceros y la señora Franco Lerma, por lo que dicha pretensión carece de fundamento fáctico y jurídico.

b. Daño a la vida en relación

Me opongo a la prosperidad del perjuicio reclamado por los demandantes por concepto de daño a la vida en relación, pues al ser notoria la ausencia de pruebas sobre la responsabilidad de la demandada, no habría lugar a que la parte pasiva se viera obligada a proceder con el pago de cualquier indemnización perseguida. Además, no es suficiente alegar un daño, se debe llevar al Juzgador al convencimiento de que el mismo existe, debiendo adicionalmente acreditarse su gravedad y como se

dijo, probarse la responsabilidad de la entidad demandada, lo que en el presente caso no ocurre.

En complemento, se tiene que el perjuicio denominado “daño a la vida en relación” pretendido por la parte actora fue abolido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ahora bien, en el remoto evento que el Juzgador conceda la pretensión, adecuándola al daño inmaterial de “daño a la salud”, tampoco resultaría procedente, debido a que no se ha demostrado el nexo causal entre el presunto daño y el actuar de las demandadas, así como tampoco la gravedad o magnitud de la lesión.

c. Daño a la salud

Con respecto al daño a la salud, la parte demandante pretende la suma de 100 SMLMV en favor de la señora Blanca Everly Franco Lerma, la cual no puede ser reconocida por el despacho, dado que no es posible establecer una relación de causalidad entre la ocurrencia del evento y los supuestos perjuicios reclamados. Además, en concordancia con el argumento anterior el valor pretendido es desproporcional y no se acompaña de ninguna prueba que acredite la gravedad de sus lesiones.

Frente a dicho perjuicio, es necesario precisar que el mismo, se repara con base en dos componentes: (i) uno objetivo, el cual está determinado por el porcentaje de invalidez; y, (ii) uno subjetivo, que puede permitir incrementar o disminuir en determinada proporción el primer valor, conforme a las consecuencias particulares y específicas. Al respecto se ha establecido:

“[P]or lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.”

Adicionalmente, en el documento del 28 de agosto de 2014 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, existen unas variables que deberán ser tenidas en cuenta por el operador jurídico. Veamos:

“Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o

componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se considerarán las siguientes variables:

- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado. - Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
- La edad.
- El sexo.
- Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.
- Las demás que se acrediten dentro del proceso.”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que, en el presente caso, de tasarse una remota condena con motivo de este perjuicio, la indemnización deberá estar ajustada a los preceptos jurisprudenciales y al documento que acredita la gravedad de las lesiones.

d. Lucro cesante

Se plantea en el escrito de la demanda que se debe reconocer en favor de la señora Blanca Everly Franco Lerma perjuicios por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, con base en el valor del salario mínimo legal mensual vigente, sin embargo, no hay prueba que permita conceder un perjuicio de esta naturaleza. En primer lugar, porque Aerocali S.A. no es responsable de las lesiones de la señora Franco Lerma. En segundo lugar, la cuantía alegada no fue probada, dado que no existe dentro del plenario una prueba tan siquiera sumaria que evidencie la realización de la actividad económica por parte de la señora Franco Lerma en la fecha de ocurrencia de los hechos. En el supuesto que sea comprobable, no hay prueba de la frecuencia en la cual la desarrollaba y por ende de los ingresos percibidos.

El lucro cesante se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica, de contenido pecuniario, es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la

afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir, que no ingresará al patrimonio de la persona, es decir, que se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar. No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es decir que si no se hubiese producido el daño el ingreso debía percibirse, es necesaria su plena demostración con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“(…) El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del “(…) perjuicio que el daño ocasionó (…). Este último para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir, “(…) cierto y no puramente conjetural, [por cuanto] (…) no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario (…)”¹³

Así mismo, en Sentencia del 24 de junio de 2008, la misma corporación afirmó que:

“(…) En cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (…).

Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (…).

Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables”.¹⁴

Esto significa que el lucro cesante no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones

¹³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de junio de 2018. Expediente SC 2107-2018

¹⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de junio de 2008. Radicado 2000-01121-01

fantasiosas o especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias. Por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso. De manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso, siempre que logre acreditarse que en efecto la víctima, al momento de la ocurrencia del daño, ejerciera alguna actividad productiva que le generara los ingresos dejados de percibir.

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que podían emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Honorable Consejo de Estado, en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019, providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es, la certeza. De manera que el lucro cesante solo se reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

“(…) La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (…). En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención. Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación. La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante (…).”

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva no acredite los ingresos percibidos por el efectivo

desarrollo de una actividad económica, por como se dijo, contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual, tal como ocurre en el caso de marras.

F. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA

Es imposible imponer una condena y ordenar el resarcimiento de un detrimento por perjuicios no demostrados o presuntos, o si se carece de la comprobación de su magnitud y realización, ya que no es admisible la presunción en esa materia, de manera que una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos necesariamente se traducirá en un lucro indebido, como sucedería en un caso como el presente.

El enriquecimiento sin causa se configura en todos aquellos eventos en los que se acrecienta el patrimonio de una persona, a expensas del detrimento del patrimonio de otra persona o entidad estatal, sin que medie para este desplazamiento patrimonial una causa jurídica o justificación alguna.

Así las cosas, la configuración del enriquecimiento sin causa presupone la existencia de dos patrimonios diferentes, uno que se debe empobrecer y otro que se enriquece a costa de dicho empobrecimiento.

El fundamento jurídico de la prohibición de enriquecimiento injustificado se basa en el artículo 8 de la ley 153 de 1887, en virtud de la cual “cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. Cabe decir, que el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia en su primer numeral, establece “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, en virtud del cual se puede apoyar el principio de enriquecimiento injustificado.

A su vez, el enriquecimiento sin causa se fundamenta igualmente en el artículo 831 del C. de Co., que preceptúa: “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”. Sin embargo, el desarrollo de éste ha sido doctrinario y jurisprudencial, apoyándose en normas constitucionales para darle soporte y exigibilidad a la misma.

Como se observa en caso en marras, acceder a las pretensiones injustificadas y tasadas de manera arbitraria sin soporte que las fundamente, originaría un enriquecimiento sin causa de la parte actora, situación que atenta contra los derechos y principios de carácter constitucional, por lo cual, al no haberse acreditado los perjuicios y pretensiones expuestas en la demanda, la parte actora incumplió su deber, no dejando más camino para que el juez despache desfavorablemente sus suplicas.

Por lo anterior, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

G. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN FORMULO EL LLAMAMIENTO DEN GARANTÍA A MI REPRESENTADA.

Coadyuvo las excepciones propuestas por la Concesionaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A. sólo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mi representada, ni comprometan su responsabilidad.

H. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de la prescripción del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece: “

“(…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y **sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada**. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.” (subrayado y negritas propias).

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción deberá reconocerse de manera oficiosa en la sentencia que defina el mérito.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO IV. CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LA CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN – AEROCALI S.A.

Siguiendo el orden propuesto, en este acápite se desarrollará lo concerniente al llamamiento en garantía formulado por la Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A. a la sociedad que represento. Así pues, se procederá:

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “PRIMERO.”: Es cierto, Aerocali S.A. es la tomadora y asegurada de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Entidades Estatales

No. 15013120000727, cuyo objeto es: “AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE A AEROCALI S.A. POR DAÑOS A TERCEROS, AL PERSONAL DE LA UAEAC Y DE LA ANI, INCLUYENDO SUS EMPLEADOS, AGENTES O SUBCONTRATISTAS CAUSADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 058-CON-2000 DEL PRIMERO DE JUNIO DE 2000 PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA CONCESIONADA DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE PALMIRA (VALLE) QUE PRESTA SUS SERVICIOS PRINCIPALMENTE A LA CIUDAD DE CALI (VALLE)”, y que estuvo vigente entre el 23 de junio de 2015 al 23 de junio de 2017. Sin embargo, ello no implica *per se* que exista actualmente una obligación indemnizatoria exigible en contra de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “SEGUNDO.”: No es un hecho que describa, pruebe o acredite la existencia de una relación sustancial entre el llamante en garantía y el llamado, por ello, no cumple con la finalidad contemplada en el artículo 225 del C.P.A.C.A., la cual es establecer la existencia de una relación sustancial por parte de quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir. Hace referencia a los hechos alegados en la demanda que pretenden atribuir responsabilidad a Aerocali S.A.

Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “TERCERO.”: Sobre este hecho es pertinente aclarar que la mera vinculación de una aseguradora al proceso en virtud del contrato de seguro existente no genera implícitamente que las pólizas deban afectarse. Es obligatorio que no se excedan los límites y coberturas pactadas, y/o desconozcan las condiciones particulares y generales de la Póliza y las disposiciones que rigen el mismo, así como también, es indispensable que no se exceda el ámbito de amparo otorgado o no se demuestra la realización del riesgo asegurado o se comprueba una causal de exclusión. En el presente caso, tal como se expuso ampliamente, no se ha demostrado la responsabilidad extracontractual de la entidad asegurada, Aerocali S.A., lo que impide configurar el supuesto fáctico previsto en la póliza para la procedencia del pago. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1072 y 1077 del Código de Comercio, sin prueba de la ocurrencia del siniestro —es decir, de la responsabilidad atribuida en la demanda— no se consolida la obligación indemnizatoria, la cual permanece como una obligación condicional y, por tanto, actualmente inexigible. Adicionalmente, como se expondrá más adelante, se encuentran prescritas las acciones derivadas del contrato de seguro.

Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “CUARTO.”: No corresponde a un hecho que fundamente el llamamiento en garantía.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Frente a la pretensión denominada “PRIMERO”: No me opongo, como fuere, el llamamiento en garantía formulado por el Aerocali S.A., ya ha sido admitido, sin embargo, esto no es óbice para que en representación de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. me pronuncie sobre los fundamentos fáctico y jurídicos sustentos del mismo.

Frente a la pretensión denominada “SEGUNDO”: Me opongo a que se imponga condena alguna en contra de mi representada, en tanto, las acciones derivadas del contrato de seguro se encuentran prescritas, adicionalmente no se ha cumplido la obligación condicional de la que pende su surgimiento. Así mismo, solicito se apliquen las condiciones concertadas a través del contrato de seguro, las cuales condicionan la eventual obligación indemnizatoria de mí procurada, entre ellas, las sumas aseguradas, los deducibles y las exclusiones pactadas. Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que al ser inexistente la responsabilidad que se pretende atribuir a la parte pasiva del litigio, resulta imposible afectar el citado contrato, habida cuenta de que no se materializó el riesgo asegurado a través de dicha garantía.

III. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

A. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

El artículo 1081 del Código de Comercio, establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. La mencionada disposición específicamente señala:

“Art. 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que hace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En el primero de los casos, como se observa, la prescripción opera para el asegurado; mientras que en el segundo para cualquier clase de persona (tercero afectado). Del texto normativo, destaca el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria, pues en tanto la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no se efectúa esa distinción. Sobre este particular y en especial para

establecer la diferencia entre los dos tipos de prescripciones derivadas del contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil ha manifestado lo siguiente:

(...) En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971, siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada –en general-, prohijó para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria (...)

Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que **la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, (...))**, al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que, expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento. ¹⁵(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Ahora bien, el artículo 1131 del Código de Comercio, indica la forma en la que se determina el momento a partir del cual corren los términos de prescripción: *“(...) Artículo 1131: OCURRENCIA DEL SINIESTRO: En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. **Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial** (...)”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Para el caso que nos ocupa, se advierte que se encuentra acreditada la configuración del término prescriptivo de la acción con respecto a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Entidades Estatales No. 1501312000727 frente a mi representada, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. En tanto, el hecho objeto del litigio ocurrió el 12 de diciembre de 2016, con el presunto accidente sufrido por la señora Blanca Everly Franco Lerma, mientras que la radicación de solicitud de conciliación extrajudicial por parte de los ahora demandantes se realizó el 12 de diciembre de 2018, fecha que constituyo el inicio del término de prescripción para el asegurado. Es decir, desde el 13 de diciembre de 2018 hasta el 13 de marzo de 2020. No obstante, solo hasta el 29 de mayo de 2024 fue requerida Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. mediante llamamiento en garantía formulado por Aerocali S.A. Tal y como consta en el expediente digital.

En tal virtud, no existe duda que Aerocali S.A. al dejar pasar el término bienal después de conocer los hechos que daban lugar ejercitar su derecho que hoy reclama en curso de este proceso, permitió que se extinguieran las acciones derivadas del contrato de seguro como consecuencia de la prescripción

¹⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 2002. MP: Dr. Nicolás Bechara Simancas

de que trata el artículo 1081 del C.Co. Lo anterior, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos esgrimidos en esta excepción.

Por lo anterior, se solicita al Honorable Despacho declarar fundada y próspera la presente excepción

B. INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES No. 1501312000727

No existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado pactado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1501312000727. En el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad que pretende el extremo activo endilgar, luego que para justificar sus pretensiones el actor no cuenta con pruebas fehacientes para determinar la responsabilidad en cabeza de la Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A.

En este orden de ideas, en concordancia con todo lo referenciado a lo largo del presente escrito, se propone esta excepción toda vez que Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. no está obligada a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro. Así entonces, es necesario señalar que, al tenor de las condiciones documentadas en la póliza en mención, que el objeto se pactó así:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL IMPUTABLE A AEROCALI S.A. POR DAÑOS A TERCEROS, AL PERSONAL DE LA UAEAC Y DE LA ANI, INCLUYENDO SUS EMPLEADOS, AGENTES O SUBCONTRATISTAS CAUSADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 058-CON-2000 DEL PRIMERO DE JUNIO DE 2000 PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA CONCESIONADA DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE PALMIRA (VALLE) QUE PRESTA SUS SERVICIOS PRINCIPALMENTE A LA CIUDAD DE CALI (VALLE).

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PROVENIENTE DE RECLAMACIONES O DEMANDAS DERIVADAS DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS CAUSADOS A LOS BIENES O A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE TERCEROS, DE LA UAEAC, INCLUYENDO EMPLEADOS, SUBCONTRATISTAS O AGENTES DE LA UAEAC QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE HECHOS ORIGINADOS EN LA CULPA DEL CONCESIONARIO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguro en

comento no es otro que la “*Responsabilidad Civil Extracontractual*” en que incurra el asegurado, Aerocali S.A., en ejecución del contrato de concesión 058-CON-2020. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la Póliza No. 1501312000727 entrará a responder, si y solo sí el asegurado, es declarado patrimonialmente responsable por los daños irrogados a “terceros” y siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que enerve los efectos jurídicos del contrato de seguro. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad civil constituirá el “*siniestro*”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del C.Co.).

En el presente caso, no existe responsabilidad atribuible al asegurado Aerocali S.A., y, por tanto, no se configura obligación indemnizatoria alguna que permita activar el amparo pactado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1501312000727. En efecto, no se acreditó la ocurrencia del hecho que la parte demandante describe como generador del daño, ni mucho menos su imputación fáctica o jurídica a Aerocali S.A. No existe prueba conducente, pertinente o útil que demuestre, siquiera indiciariamente, que el supuesto accidente sufrido por la señora Blanca Everly Franco Lerma haya tenido como causa una omisión en los deberes de señalización, prevención o seguridad por parte de Aerocali S.A. Tampoco se acreditó que existieran obras de construcción en curso el día 12 de diciembre de 2016 dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ni que se encontraran residuos de materiales de construcción en zonas transitadas por los pasajeros.

Adicionalmente, se advierte una ausencia absoluta de prueba sobre la relación de causalidad entre el presunto hecho y las supuestas lesiones de la actora. La historia clínica fue expedida casi un año después de la fecha referida por la demandante y consigna diagnósticos de origen degenerativo, sin relacionar de manera clara, específica ni directa el estado clínico de la paciente con un accidente ocurrido en el aeropuerto. De igual forma, no se allegó reporte de novedad, informe de primeros auxilios, intervención de personal médico o de seguridad, ni reporte alguno de la aerolínea que respalde la versión de los hechos.

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el líbello de la demanda, así como los medios probatorios aportados al plenario, se tiene que el extremo activo no acreditó que efectivamente el riesgo asegurado se haya materializado por el concurso de los elementos propios de la responsabilidad y, por consiguiente, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. En consecuencia, no se logra estructurar una responsabilidad civil en cabeza del asegurado, esto es, no se realiza el riesgo asegurado como condición sine qua non para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, pudiera corresponder a la aseguradora.

Se concluye, que al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad civil, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado de las pólizas que sirvieron como sustento para llamar en

garantía a mi representada. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la Aseguradora.

En mérito de lo expuesto, solicito señora Juez declarar probada esta excepción.

C. EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES No. 1501312000727

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro”¹⁶.

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se exhorta a los Jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. No. 1501312000727 señala una serie de exclusiones, las cuales solicito aplicar expresamente al caso concreto, si se llegaren a probar dentro del proceso, como las siguientes:

“EXCLUSIONES

(...)

DAÑOS POR LA INOBSERVANCIA DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE.

(...)

¹⁶ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020

SE CUBREN EXCLUSIVAMENTE LOS DAÑOS CAUSADOS DENTRO DE LOS EDIFICIOS DEL AEROPUERTO, PERO EXCLUYENDO ZONA DE PISTAS Y ÁREAS DE ACARREO, GALPONES Y HANGARES.”

Así mismo en las condiciones generales del contrato de seguros, se excluyeron los siguientes riesgos:

“SECCIÓN SEGUNDA- EXCLUSIONES

(...) ...

- Vibración del suelo, debilitamiento de cimientos o bases, asentamiento, variación del nivel de aguas subterráneas.
- Daños originados por la acción paulatina de aguas...”

En conclusión, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones anteriormente señaladas o las que constan en las condiciones generales y particulares de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1501312000727, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

D. CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LO SOLICITADO EN EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Es importante iniciar señalando que deberá darse aplicación al principio de congruencia, en ese sentido no habrá lugar al reconocimiento de pretensiones que no fueron solicitadas por el llamante. En este punto, téngase en cuenta, que verificado el escrito de llamamiento en garantía se evidencia que, en el mismo, no se encuentra consignada una sola pretensión declaratoria o condenatoria en contra de la aseguradora que aquí represento, por lo que no hay lugar al reconocimiento de pretensiones que claramente no fueron solicitadas en la oportunidad procesal correspondiente. En ese sentido, es necesario señalar que el principio de congruencia es la regla del derecho procesal, en virtud del cual el Juez se encuentra obligado a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y pretensiones que se presentan en los escritos que se elevan ante los Despachos. El artículo 281 del Código General del Proceso, contempla los preceptos que debe seguir el Juez en sus sentencias de la siguiente forma:

ARTÍCULO 281. CONGRUENCIA. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar *ultrapetita* y *extrapetita*, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones *extra* o *ultrapetita*, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas.

En virtud de lo anterior, se puede concluir que: i) no es válido emitir fallos *ultra petita*, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandado por una cantidad superior a la solicitada en el líbello de la demanda, o sentencias que concedan más de lo pedido. ii) Tampoco se pueden emitir fallos *extra petita*, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandado con base en pretensiones distintas a las deprecadas en la demanda y iii) no pueden ser proferidas sentencias por causas distintas a las invocadas en el *petitum* de la demanda. En cuanto a la importancia del principio de congruencia, la Corte Constitucional ha indicado:

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de

la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó. Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

(...)

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello¹⁷. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, resulta incuestionable que el juez al momento de fallar no podrá desbordarse de las pretensiones propuestas. Es claro entonces que la sentencia que resuelve la demanda está sometida al principio de congruencia. Así las cosas, se evidencia a través de preceptos legales y jurisprudenciales que el Juez está en la obligación de garantizar el derecho de defensa y debido proceso dentro de las actuaciones judiciales, a las partes intervinientes en el proceso, en el sentido de no proferir sentencia sobre aspectos adiciones a los solicitados por las partes, o que no hayan sido solicitados. Teniendo en cuenta todo lo previamente mencionado, ahora es necesario aterrizar la teoría al caso concreto. Se evidencia en el escrito del llamamiento que el mismo no contiene pretensiones formuladas en contra de la compañía se seguros que represento, desconociendo lo estipulado en el artículo 82 del Código General del Proceso.

Así las cosas y de la lectura del escrito no se evidencia ninguna pretensión en la cual se solicite hacer efectiva la póliza de seguro emitida por **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.** pese a que en cualquier caso ello resultaría improcedente. Razón por la cual, el Juez no podrá ordenar el pago de suma alguna en cabeza de esta aseguradora cuando es claro que el llamante en garantía en ningún momento solicitó la afectación de la póliza de seguro emitida por mi representada.

En conclusión, se evidencia como en el presente asunto la parte no siguió los lineamientos dispuestos en el artículo 82 del Código General del Proceso para la presentación del llamamiento en garantía,

¹⁷ Sentencia T-455 de 2016, Corte Constitucional. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO.

pues ni siquiera planteó pretensiones en el escrito. Es por ello que, bajo el principio de congruencia, al juez no le es dable en el contenido de la sentencia ordenar la afectación de la póliza de seguro expedida por mi representada. Razón por la cual, el Juez no podrá pronunciarse o decidir más allá de lo consignado en las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, y de la lectura de estos documentos, se denota que la parte llamante no solicitó la afectación de la Póliza en mención. Por lo que no procederá reconocimiento de emolumento alguno.

E. LIMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR PACTADOS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES No. 1501312000727

En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1079 del Código de Comercio, el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

En el caso en concreto se estableció el límite de 10.000.000 USD, el cual se encuentra sujeto a la disponibilidad de la suma asegurada, dado que la ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción, la cual enmarca las obligaciones de las partes, planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

F. NO PUEDE PASARSE POR ALTO EL DEDUCIBLE ESTABLECIDO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES No. 1501312000727

En la póliza en estudio, se estipuló adicionalmente la existencia de un deducible, el cual legalmente está permitido, luego que se encuentra consagrado en el artículo 1103 del Código de Comercio; este reza que:

“(…) Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original (…)”

Por otra parte, y de acuerdo con la normatividad vigente, la Superintendencia Financiera de Colombia en Concepto No. 2019098264 del 29 de agosto de 2019, ha sido clara en definir en qué consiste el deducible indicando lo siguiente:

“…Sin embargo, es preciso señalar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe disposición que obligue al asegurador a indemnizar conforme a determinado régimen específico, en consecuencia, sea que la incapacidad o la lesión se acredite en las formas mencionadas en su comunicación, la fijación del monto de la indemnización se rige por las estipulaciones que al respecto hubieren pactado el tomador y el asegurador.

Dicho esto, en una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio que resulta legalmente viable, de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil.

En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado “...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño”.

Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

Por tanto, el valor del ofrecimiento extendido por la compañía aseguradora, podría variar en función de los perjuicios sufridos por el reclamante, así como los elementos probatorios que se hubieren allegado para acreditar el valor de la pérdida, conforme lo presupuestado en el artículo 1077 del

código de comercio, aunado a las condiciones generales y particulares pactadas en la póliza, como lo son el límite del valor asegurado, el deducible pactado con el asegurado, entre otros factores.

En ese sentido, sin aceptar responsabilidad alguna y a modo ilustrativo, debe tenerse en cuenta, que el deducible, el cual corresponde a la fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta la Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Aerocali S.A. como aseguradas, para el caso que nos ocupa corresponde al 10% del valor de la pérdida o del valor total de la condena, mínimo 5.000 USD. Esto significa que, en caso de que el asegurado sea condenado en el presente proceso, deberá cubrir al menos el valor de 5.000 USD de la indemnización, mientras que a la aseguradora le correspondería el saldo restante. El despacho deberá tener presente que, al momento de atribuir responsabilidades sobre el cubrimiento del presunto daño antijurídico causado, que al asegurado le correspondería cubrir los montos señalados, y que a la aseguradora le concerniría, eventualmente, el saldo sobrante. Es decir que, en el improbable caso de endilgarse responsabilidad a Aerocali S.A. estas tendrían que cubrir el porcentaje anteriormente indicado como deducible y, a la aseguradora le atañería cubrir el valor del saldo.

G. LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES No. 1501312000727 OPERA EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

En el remoto e hipotético evento de llegarse a determinar que sí se realizó el riesgo asegurado en la póliza soporte del llamamiento en garantía, debe tener presente el fallador que esta ópera en exceso de cada una de las pólizas individuales que debe tener contratada todos los contratistas y subcontratistas que se deriven de las actividades a realizar:

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, SE AMPARA HASTA POR EL SUBLÍMITE ESTABLECIDO EN ESTAS CONDICIONES PARTICULARES LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE A DICHS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS A CONSECUENCIA PARTICULARES LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON EL ASEGURADO. SE EXIGE QUE HAYA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA DEL ASEGURADO. LA RC PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS CONTRATISTAS NO SE ENCUENTRA AMPARADA. EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO DEBERÁ DEMOSTRAR MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO, LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA. ESTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PROPIAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS O EN SU DEFECTO EN EXCESO DE USD25.000 POR EVENTO, SUBLIMITADO A USD1.000.000 POR EVENTO Y USD2.000.000 EN EL AGREGADO VIGENCIA. POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES, SE ENTENDERÁ TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALICE LABORES POR CUENTA DEL ASEGURADO, EN VIRTUD DE CONTRATOS O CONVENIOS DE CARÁCTER ESTRICTAMENTE COMERCIAL Y QUE CONSTEN POR ESCRITO. ADICIONALMENTE, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE CUANDO SE TRATE DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE O RELACIONADA CON OPERACIONES O TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O MONTAJE DE OBRAS, ESTAS NO DEBEN SUPERAR UN VALOR MÁXIMO DE COP500.000.000.

Lo expuesto, de llegarse a vincular algún contratista o subcontratista del asegurado.

H. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de

una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda, no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte de Aerocali S.A implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo un pago por parte de las entidades demandadas que no le corresponde normativamente.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciendo a la parte actora.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiende a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción, y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y

un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la parte actora.

I. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO.

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

En los anteriores términos, solicito respetuosamente señora Juez, declarar probada esta excepción.

J. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Y LOS DEMANDADOS

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es importante recabar sobre el particular por cuanto a que la obligación de mí representada tiene su génesis en un contrato de seguro celebrado dentro de unos parámetros y límites propios de la autonomía de la voluntad privada y no de la existencia de responsabilidad civil extracontractual propia de la aseguradora, sino de la que se pudiere atribuir al asegurado conforme lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil, por tanto se encuentra frente a dos responsabilidades diferentes a saber: 1. La del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegará a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de la ley propia y 2. La de mí representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente dicha, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado, constituyéndose entonces las obligaciones del asegurado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y mediante ponencia del Dr. Ariel Salazar

Ramírez en sentencia SC20950-2017 Radicación n° 05001-31-03-005-2008- 00497-01 ha indicado que: “(...) *Por último, la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co (...)»*”

Entendido lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones en Colombia solo se origina por pacto que expresamente la convenga entre los contrayentes, lo anterior según el art. 1568 del Código Civil Colombiano que reza:

“(…) En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.”

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se formula esta excepción por cuanto el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual puede alegar mí representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia y cuantía del siniestro y las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

K. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito su señoría declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el decurso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato de seguro por el cual se convocó a mí representada, incluida la de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

Lo anterior, conforme a lo estipulado en el art 282 del Código General del Proceso que establece:

“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción deberá reconocerse de manera oficiosa en la sentencia que defina el mérito. Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

CAPITULO V. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

- **DOCUMENTALES**

- Poder general que me faculta para actuar como apoderado de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
- Certificado de existencia y representación legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
- Copia de la caratula y condicionado general y particular de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Entidades Estatales No. 1501312000727

- **INTERROGATORIO DE PARTE**

Se solicita respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas o la oportunidad procesal correspondiente a la demandante, Blanca Everly Franco Lerma, con la intención de que responda a las preguntas del cuestionario que enviare al despacho o las que formule verbalmente en la misma diligencia, correspondiente a la aclaración de las situaciones de hecho que motivo la presente demanda.

Los demandantes podrán ser citados en la dirección y/o correo electrónico que señalo su apoderado judicial.

- **OPOSICIÓN AL DICTAMEN PERICIAL SOLICITADO POR LA DEMANDANTE**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, “la parte que

pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días”. En consecuencia, correspondía a la parte demandante allegar al expediente el dictamen pericial que pretende se practique para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la señora Blanca Everly Franco Lerma, o, en su defecto, solicitar oportunamente un término prudencial para su incorporación. Por tanto, no resulta procedente trasladar al despacho la carga de practicar dicha prueba pericial.

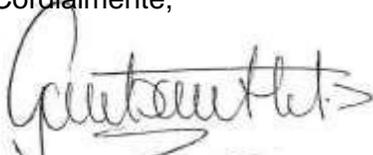
Por lo anterior, solicito respetuosamente se niegue el decreto del dictamen pericial solicitado por la parte demandante, en la medida en que era su responsabilidad aportarlo en las oportunidades procesales previstas para tal efecto.

CAPITULO VI. NOTIFICACIONES

A la parte actora, y su apoderado, en las direcciones referidas en el escrito de la demanda.

Al suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali (V) o correo electrónico notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.